

PRESENTACIÓN DEL *DOSSIER*: CIENCIA, POLÍTICA Y CONOCIMIENTO PÚBLICO: NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE UNA INTERFAZ EN TRANSFORMACIÓN

Editores invitados

LUIS ANTONIO OROZCO*

MARÍA PIEDAD VILLAVECES**

Editor

ANDRÉS MACÍAS-TOLOSA***

Esta edición especial reúne trabajos que se gestaron antes, durante o después de la realización de la I Convención Interfaz Política Ciencia organizada por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia), en noviembre de 2024, como eje central de su acción misional de conectar a la comunidad científica de la sociedad civil organizada. Esta edición es un acercamiento académico a una temática emergente en la investigación que se desarrolla en América

Latina y el Caribe, con la que queremos estimular a los académicos de la región a investigar y crear nuevo conocimiento que nos posibilite mejorar las estructuras y los mecanismos para que exista una interfaz política-ciencia que permita una reflexión sobre la intersección-separación-yuxtaposición de esas dos aproximaciones epistemológicas para la comprensión de nuestras realidades sociales.

* Profesor titular, Universidad Externado de Colombia; presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia). [LUIS.OROZCO@uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0001-7526-4500].

** Asesora jurídica; exdirectora y expresidenta de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia). [mvillaveces@avanciencia.org]; [https://orcid.org/0000-0002-2209-5165].

*** Ph. D. Docente-investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI), Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [hector.macias@uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0003-0572-4772].

DOI : <https://doi.org/10.18601/16578651.n38.01>

En las últimas décadas, que se enmarcan en un contexto global de incertidumbre, aceleración tecnológica y crisis de legitimidad de las instituciones, el debate sobre la interfaz entre ciencia y política afirma que la interacción entre ambos campos es simultáneamente necesaria y problemática: necesaria porque los desafíos sociales –desde el cambio climático hasta la seguridad alimentaria o la gobernanza digital– exigen decisiones informadas por evidencia científica; problemática porque los valores, los intereses y las temporalidades de la política y la ciencia difieren profundamente (Jasanoff, 2004; Pielke, 2007; Sarewitz, 2010; van den Hove, 2007).

Varias han sido las subcategorías epistémicas que se han propuesto para el estudio de esta interfaz: desde la perspectiva de Sheila Jasanoff (2004), la coproducción de conocimiento muestra que la ciencia y la política se nutren mutuamente. Sheila es contundente al afirmar que la ciencia no es apolítica, sino que sus procesos de financiamiento y sus preguntas de investigación se enredan constantemente con cuestiones políticas e incluso legales.

Por su lado, Roger A. Pielke, Jr. (2007) propone estudiar la relación ciencia y política a partir de la identificación de roles intermedios entre ambos objetos de estudio, en donde surgen actores como el “científico honesto” o el “*broker* de conocimiento” capaces de mediar entre evidencia –producida por la ciencia– y toma de decisión –necesaria en la escena política–.

Más recientemente, Daniel Sarewitz (2010) propone una pluralización del

conocimiento como forma de fortalecer la legitimidad democrática en la toma de decisiones, haciendo que el debate público incorpore argumentos del conocimiento científico para la toma de decisiones informada de políticas públicas.

Otra mirada es la que propone Sybille van den Hove (2007), quien define la interfaz ciencia-política como un proceso de coevolución en el que la calidad de la relación depende tanto de la credibilidad científica como de la relevancia política, en el que la confianza en las métricas y los indicadores son clave para tener puntos comunes de encuentro y reflexión. Existen otras aproximaciones en la literatura; lo interesante es que este *dossier* de la revista OPERA presenta cuatro artículos que pueden, en nuestra visión, inscribirse en cada uno de esos enfoques.

El primer artículo, “Política como ciencia y política como ideología: un viejo debate”, escrito por William Guillermo Jiménez y Orlando Meneses Quintana, se inscribe en el enfoque de Jasanoff (2004), pues los autores analizan, a partir de una revisión hermenéutica de las tradiciones epistemológicas de Weber, Habermas y Bourdieu, el papel del politólogo entre la objetividad científica y el compromiso ideológico. El artículo argumenta que toda aproximación científica a la política es ya una toma de posición política sobre la realidad humana. Frente a la pretensión de neutralidad, los autores reivindican la honestidad intelectual como forma superior de responsabilidad científica, reconociendo que estos son valores e intereses que guían la investigación, lo cual aporta al debate abierto

por Jassenoff sobre las interconexiones entre lo político y lo científico.

El segundo artículo, “Una interfaz política-ciencia desde el pregrado: GobLab como caso de estudio”, de Erli Margarita Marín-Aranguren y Jaime Andrés Romero Bermeo, evidencia el rol de los académicos como intermediarios de conocimiento, lo cual es cercano a la visión epistémica propuesta por Pielke, Jr. (2007). En este artículo, los autores analizan el rol académico en la relación entre ciencia y política a partir del caso del GobLab de la Universidad Externado de Colombia. Este laboratorio de aprendizaje experiencial articula estudiantes, docentes y tomadores de decisión en torno a problemas públicos reales. El estudio muestra que el GobLab funciona como una plataforma de coproducción de conocimiento que refuerza la legitimidad y la pertinencia del saber científico al ponerlo en diálogo con las demandas del entorno.

En el marco de una interfaz política-ciencia como propone Van den Hove (2007), fundamentada en la orientación conjunta de agendas de investigación, mecanismos de financiamiento y evaluación de la productividad científica, el trabajo de Luciano Guillermo Levin, titulado “Producción, productividad, presupuesto y orientación temática de la ciencia y tecnología en Argentina, 2004-2020”, expone las dinámicas de producción científica en Argentina y el papel del Conicet como institución central del sistema de ciencia y tecnología. Mediante un análisis bibliométrico y presupuestal de largo plazo, el estudio muestra una disociación entre el incremento del financiamiento y la

productividad científica, así como una reorientación temática hacia las ciencias sociales y la medicina.

Finalmente, para el enfoque de un conocimiento plural y la toma de decisiones democráticas que delinea Sarewitz (2010), el artículo titulado “Diseño institucional y diversidad territorial: límites estructurales del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria en Colombia. La innovación como disputa entre saberes, escalas y formas de gobernar el territorio”, escrito por Juan Carlos Martínez y María Fernanda Garrido, presenta una crítica profunda al diseño del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA). A partir de un análisis institucional y territorial, el texto revela cómo la centralización normativa y la estandarización metodológica del SNIA impiden la integración de saberes locales y la construcción de una gobernanza democrática de la innovación. El artículo propone avanzar hacia modelos de gobernanza multinivel y coproducción territorial del conocimiento.

Los artículos reunidos en esta edición especial ofrecen una mirada plural sobre la interfaz política-ciencia como un espacio de tensiones, aprendizajes y renegociaciones. Desde la epistemología de la ciencia política hasta los laboratorios de aprendizaje y los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, las contribuciones convergen en un diagnóstico común: la calidad democrática de nuestras sociedades depende en gran medida de la calidad de los vínculos entre conocimiento científico y decisión política. Esta edición sugiere dos líneas generales para una agenda futura de investigación. La primera, en el rol

de intermediarios para una coproducción y legitimidad del conocimiento necesario para el diseño conjunto de políticas públicas basadas en evidencia. La segunda, en el involucramiento de actores clave para la definición de agendas de investigación que permitan aprovechar la financiación para la territorialización de la ciencia y el diálogo entre sistemas y subsistemas de ciencia. Al situar estos debates en el marco latinoamericano, este *dossier*, liderado por AvanCiencia por invitación del Comité Editorial de la revista OPERA, reafirma su compromiso con una ciencia social crítica, contextualizada y orientada al bien común.

De manera complementaria al *dossier* temático, este nuevo número de la revista *Opera* incluye otros siete artículos académicos de tema libre y una reseña. Los artículos presentan, en primera instancia, un panorama regional en torno a dos temas de gran relevancia: la cuestión urbana y los indicadores de derechos humanos; y, en segunda instancia, abordan casos de estudio de México, Venezuela, Chile y Colombia, lo que enriquece enormemente la discusión y la reflexión alrededor de las políticas públicas y la administración pública.

El primer artículo de esta sección de tema libre, “Derecho a la ciudad y derecho urbanístico en América Latina: los marcos regulatorios y la cuestión urbana latinoamericana”, es escrito por Guilherme Estima Giacobbo y Ricardo Hermany. El artículo

analiza el panorama del derecho a la ciudad en América Latina y la necesidad de adecuar los marcos jurídicos urbanísticos para hacerlo efectivo. A través de un enfoque deductivo y de revisión bibliográfica, legislativa y monográfica, los autores examinan cómo el paradigma civilista tradicional, que concibe la propiedad como un derecho absoluto, obstaculiza su función social. El estudio propone un eje común de políticas públicas centrado en la recuperación de plusvalías urbanísticas y el control público de la propiedad. Con base en la teoría lefebvriana y la Nueva Agenda Urbana, concluye que la democratización de la gestión urbana y la justa distribución de beneficios son claves para construir ciudades más equitativas y sostenibles.

En segundo lugar, Patricia Herrera-Kit, Manuela Godoy-Ardila y Paula Andrea Cano Cárdenas, con su artículo “Desafíos de los indicadores en derechos humanos: una discusión en construcción”, examinan los desafíos y las tensiones que se generan en la medición de los derechos humanos a través de indicadores, cuestionando su supuesta neutralidad y objetividad. Desde un enfoque cualitativo-documental y constructivista, las autoras analizan más de cien estudios académicos para mostrar cómo los indicadores funcionan como tecnologías de gobernanza que reflejan relaciones de poder y visiones dominantes sobre lo social. Cuestionan la fascinación por cuantificar y proponen un uso crítico, contextual y participativo de las mediciones. Finalmente, plantean la necesidad de repensar la gestión pública y diseñar indicadores que no solo midan resultados,

sino que también fortalezcan la capacidad estatal para garantizar efectivamente los derechos humanos.

El tercer artículo de la revista, que da inicio a los casos de estudio a nivel nacional, se titula “Impuesto sobre el patrimonio en el marco de la política fiscal y su efecto sobre el crecimiento económico en los municipios de Jalisco, México”. En el artículo, Edgar Ricardo Rodríguez Hernández examina el impacto del impuesto sobre el patrimonio en el crecimiento económico municipal en Jalisco, México, a partir de un modelo de datos de panel aplicado a 97 municipios entre 2010 y 2020. Con base en la teoría del federalismo fiscal de segunda generación, y en el enfoque de la calidad de las finanzas públicas, el estudio demuestra una relación positiva entre el aumento en la recaudación y el crecimiento económico. Los resultados subrayan la importancia de fortalecer las haciendas locales, mejorar la recaudación y actualizar los valores catastrales para alcanzar una mayor autonomía financiera y promover el desarrollo económico. Por último, el trabajo hace una reflexión interesante en torno a que la eficiencia en la asignación de recursos es tan crucial como su incremento para lograr un crecimiento sostenido y equitativo.

En cuarto lugar, Alejandro Cardozo Uzcátegui, en su artículo “La caja negra de la riqueza de Venezuela: cuantificación de la extracción ilícita de dólares a través de Bandes, el Fondo Chino y Fonden, 2005-2025”, analiza la extracción ilícita de entre 60.000 y 105.000 millones de dólares en Venezuela a través de Bandes, el Fondo Chino y Fonden. El autor identifica cómo la corrupción

estructural y la opacidad institucional facilitaron el desvío de recursos petroleros. Mediante un enfoque mixto que combina análisis cuantitativo y cualitativo, el estudio revela el papel de las empresas de maletín, la sobrefacturación y los proyectos inconclusos en la pérdida de capital público. Los resultados alcanzados en la investigación permiten vincular esas prácticas con el colapso económico y la crisis humanitaria del país, y proponen reformas de transparencia, supervisión y cooperación internacional para fortalecer la gobernanza en Estados rentistas y prevenir futuras regresiones autoritarias.

Francisco Socías Hernández y Juan Miguel Andujar Lobos son los autores del quinto artículo, “El agilismo en servicios de la administración pública: la experiencia del modelo Gestión Social Local en Chile”. Este artículo analiza la implementación del modelo de Gestión Social Local (GSL), en el marco del Sistema Intersectorial de Protección Social de Chile, destacando su aporte a la coordinación, eficiencia y digitalización de la atención social pública. A través de una interesante revisión de literatura, se examina cómo la aplicación de metodologías ágiles ha fomentado una cultura de compromiso compartido, colaboración interinstitucional y mejora continua en los servicios públicos. El estudio evidencia que el modelo GSL ha permitido integrar equipos técnicos, reducir tiempos de atención y fortalecer la articulación entre políticas sociales. El artículo plantea que el GSL se consolida como una estrategia innovadora de gestión pública que impulsa la simplificación administrativa, la interoperabilidad de la información y una

atención más eficiente e inclusiva hacia la ciudadanía, especialmente en los sectores más vulnerables.

En el sexto artículo, de Natalia Ramírez Zamudio, “Incautaciones y sanciones al tráfico ilegal de fauna silvestre en Bogotá (Colombia) y su efecto disuasorio a lo largo de tres décadas, 1996-2024”, la autora examina el efecto disuasorio de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) frente al tráfico ilegal de fauna silvestre en Bogotá entre 1996 y 2024, a partir del análisis de tres variables clave: detección, certeza y severidad de la sanción. El estudio concluye que la capacidad disuasoria de la SDA es débil, ya que el nivel de sanciones es muy bajo y las medidas correctivas han sido insuficientes frente al daño ambiental causado. Los resultados destacan que Bogotá no ha consolidado una política efectiva de aplicación de la ley ambiental, y recomienda, entre otros, fortalecer la gestión institucional mediante registros sistemáticos y estandarizados, y la reducción de la caducidad de los procesos sancionatorios. El artículo plantea una reflexión final sobre la necesidad de lograr sanciones efectivas, consistentes y proporcionales, para evitar que el tráfico ilegal de fauna silvestre continúe siendo una de las principales amenazas a la biodiversidad colombiana.

El último artículo de este número de la revista, “Gobernanzas, instituciones y política en los Comités Universidad-Empresa-Estado del Valle de Aburrá y Pasto”, escrito por David Roldán Alzate, Mariana Pinzón Villa y Vanessa Marieth Narváez Bolaños, analiza la gobernanza de los Comités Universidad-Empresa-Estado (CUEE) en

Colombia, comparando dos casos regionales para entender cómo contribuyen al desarrollo territorial. A través de una metodología cualitativa, el autor evidencia marcadas diferencias en liderazgo, institucionalización y cultura de cooperación. Puntualmente, se destaca que en Medellín, el CUEE se consolidó como un nodo estratégico respaldado por políticas públicas, confianza intersectorial y estructuras sólidas como la Ruta N y las OTRI; mientras que en Pasto, una débil apropiación institucional y la falta de una oficina de transferencia tecnológica limitaron su impacto. El estudio concluye que la clave no está en replicar modelos exitosos, sino en construir culturas locales de articulación y confianza que fortalezcan la gobernanza y la transferencia de conocimiento.

Para cerrar este número, se incluye una reseña escrita por Omar Segura, sobre el libro de César Caballero titulado *El poder de las encuestas y su incidencia en el proceso electoral colombiano*, un texto muy pertinente para la coyuntura que vive Colombia en la actualidad.

Quiero agradecer el gran trabajo adelantado por el comité editorial y los distintos evaluadores de las propuestas recibidas. De igual forma, extendiendo ese agradecimiento a las directivas de la Universidad Externado de Colombia, específicamente, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI), a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la facultad, a Adriana León, asistente editorial del CIPE, y a María José Díaz Granados, correctora de estilo, por su constante respaldo a este proceso editorial.

REFERENCIAS

- Jasanoff, S. (2004). *States of Knowledge: The Co-production of Science and Social Order*. Routledge.
- Pielke, R. A. Jr. (2007). *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics*. Cambridge University Press.
- Sarewitz, D. (2010). Against holism: Science, politics, and the history of nature. *Social Research*, 77(3), 803-848.
- Van den Hove, S. (2007). A rationale for science-policy interfaces. *Futures*, 39(7), 807-826. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2006.12.004>

